



Los niños hablan sobre los efectos de la privación de libertad: el caso de América Latina





© 2019 Naciones Unidas

Crédito de la foto de la portada: @Dora Bardales/Jessica Garcia

Todos los derechos reservados en todo el mundo

Las solicitudes de reproducción de extractos o de fotocopias deben dirigirse al Copyright Clearance Center en copyright.com

Todas las demás consultas sobre derechos y licencias, incluidos los derechos subsidiarios, deberían dirigirse a: Publicaciones de las Naciones Unidas,

300 East 42nd Street,
Nueva York, NY 10017,
Estados Unidos de América.

Correo electrónico: publications@un.org

Sitio web: un.org/publications

Título: Los niños hablan sobre los efectos de la privación de libertad: el caso de América Latina

Idioma: español

eISBN: 978-92-1-004883-5

ISSN impreso: N/A

eISSN: N/A

Los niños hablan sobre los efectos de la privación de libertad: el caso de América Latina



Publicación producida en 2019 por la
Oficina del Representante Especial del Secretario General (RESG) sobre la Violencia contra los Niños



Índice

Agradecimientos	6
1. Introducción	7
1.1 Antecedentes y objetivos	9
1.2 Metodología	9
2. Panorámica de las normas internacionales pertinentes	11
2.1 Legislación nacional	14
3. Constataciones principales	15
3.1 Factores socioeconómicos	16
3.1.1 Pobreza y falta de acceso a los servicios sociales	16
3.1.2 Drogas y alcohol	18
3.1.3 Armas pequeñas y armas ligeras	19
3.2 Niños privados de libertad	19
3.2.1 El encarcelamiento como medida de último recurso	19
3.2.2 Condiciones de encarcelamiento	20
3.2.3 Falta de acceso a una educación y formación profesional de calidad	21
3.2.4 Falta de acceso a los servicios sanitarios, en especial a los servicios de salud mental	21
3.2.5 Acceso precario a la asesoría jurídica	22
3.2.6 Grupos especialmente vulnerables	22
3.3 Niños que tienen a un padre o cuidador en la cárcel	23
4. Conclusiones	34
5. Recomendaciones	36
Anexos	40
Anexo I: Orientación para los grupos de discusión con niños privados de libertad	40
Anexo 2: Testimonios de hijos de reclusos	41
Anexo 3: Lista de organizaciones participantes que prestaron apoyo a las consultas con hijos de reclusos	42

Agradecimientos

Autores:

Annette Lyth, Jefa de la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, y Cecilia Anicama, Oficial de Protección de la Infancia, Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños.

Dentro de la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, el presente informe se benefició de las inestimables aportaciones de Francisco Quesney.

La Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños desea dar las gracias a los Gobiernos del Paraguay y el Uruguay, a las oficinas del UNICEF en el Uruguay y el Paraguay, y a Gurises Unidos y a la Plataforma Regional de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Referentes Adultos Privados de Libertad (Plataforma NNAPes) por su inestimable apoyo a las consultas y los debates de los grupos de discusión con niños afectados por la privación de libertad.

Editor

Emily Booker



@Dora Bardales/Jessica Garcia

1. Introducción

“ *Mi madre está presa desde que yo tenía ocho años. Cometió un robo, lleva seis años en la cárcel, y esta situación me ha afectado en todo porque me metieron en un centro que da mucho miedo.* ”

Uruguay, niña de entre 13 y 17 años

El riesgo de sufrir violencia que corren los niños afectados por la privación de libertad ha sido un asunto prioritario para la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños desde el inicio de su mandato en 2009. Los cuatro informes temáticos siguientes dan prueba de la amplitud y la profundidad del examen que la Representante ha hecho de la cuestión: *Prevention of and responses to violence against children within the juvenile justice system* (2012), *Promover la justicia restaurativa para niñas, niños y adolescentes* (2013), *Safeguarding the Rights of Girls in the Criminal Justice System* (2015) y *La protección de las niñas, los niños y los adolescentes afectados por la violencia armada en la comunidad* (2016). Además, la Representante desempeñó un papel destacado en la concepción de las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2014. El asunto también se ha abordado en el marco de numerosas visitas a países, en los informes anuales de la Representante Especial a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos y en diálogos mundiales, regionales y nacionales de alto nivel. En la actualidad, la Representante Especial dirige el equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad.

Con objeto de arrojar más luz sobre los efectos de la privación de libertad en el disfrute de los derechos de los niños, la Representante Especial se asoció con UNICEF, los Gobiernos del Paraguay y el Uruguay y Plataforma Regional de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Referentes Adultos Privados de Libertad (Plataforma NNAPes) para documentar las opiniones y experiencias de los niños afectados por la privación de libertad. Entre mediados de 2017 y principios de 2018 se mantuvieron consultas con un total de 504 niños, niñas y adolescentes que o bien estaban privados de libertad o tenían a un padre o cuidador en la cárcel. Componían el primer grupo 265 niños y niñas del Uruguay y 31 niños del Paraguay. De los jóvenes entrevistados en el Uruguay, 88 tenían edades comprendidas entre los 18 y 22 años, y otros 8 desconocían su edad o no la revelaron.

En cuanto al segundo grupo, se consultó a 208 hijos de reclusos; en concreto, niñas y niños de 6 a 17 años residentes en la Argentina, el Brasil, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, la República Dominicana y el Uruguay. Son los testimonios de estos jóvenes los que vertebran el presente informe y le aportan una perspectiva crítica e insustituible sobre lo que debe hacerse para proteger a los niños afectados por la privación de libertad de la violencia desgarradora que los amenaza.

Los niños privados de libertad o con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo, viven una vida marcada por la violencia y el miedo y ven sus derechos pisoteados sistemáticamente. Los dos grupos de niños tienen algo en común y es que sus vidas están condicionadas por la falta de un apoyo parental adecuado y por la violencia, el miedo, la inseguridad y la exclusión social. Por tanto, la privación de la libertad está ligada intrínsecamente al ciclo de la violencia. El recurso a la violencia está presente en su trayectoria vital, en sus familias, en el momento del arresto y durante toda la reclusión. Los niños privados de libertad experimentan un patrón de normalización de la violencia en virtud del cual esta se convierte en un medio de supervivencia. Por su parte, los hijos de reclusos viven bajo la amenaza constante de la violencia y se ven expuestos a ella en mayor medida en el hogar, en el colegio, en los centros de protección de menores, en la comunidad y cuando acuden a la cárcel para visitar a sus familiares.

Según el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños¹, los niños detenidos por la policía o internos en establecimientos correccionales corren un riesgo elevado de sufrir violencia, entre otras cosas porque la opinión pública los considera antisociales o delincuentes y porque imperan los enfoques basados en el castigo físico y psicológico. En el Estudio de las Naciones Unidas también se abordaron los factores individuales y relacionales que inciden en la probabilidad de que un niño se convierta en víctima o en perpetrador de la violencia. Los factores individuales consisten en las particularidades biográficas del niño y de los miembros de su familia, mientras que los factores de relación se refieren a la forma en que interactúan los padres, los cuidadores y los niños. La privación de libertad, ya sea la que sufre directamente el niño o la de sus padres o cuidadores, tiene un efecto considerable en todos los aspectos de la vida del primero y en la forma en que el niño y sus padres interactúan.

El Estudio de las Naciones Unidas insta a los Estados a prohibir y prevenir todas las formas de violencia contra los niños en todos los ámbitos, incluidos la familia, el sistema de justicia y la comunidad, y a darles respuesta. Concretamente, en lo que respecta al sistema de justicia, se alienta a los Estados a abstenerse de encarcelar a jóvenes en la medida de lo posible y a limitarse a recluir a los infractores de los que se considere que representan un peligro real para los demás, como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

El Estudio de las Naciones Unidas dejó claro que los Estados deben invertir en medidas de prevención, en políticas basadas en la realidad de los hechos y en programas destinados a corregir los factores que –como ocurre con la privación de libertad– exponen a los niños a un riesgo más elevado de violencia. El Estudio también puso de relieve que los Estados son los principales responsables de reforzar la capacidad de las familias para cuidar y proteger a los niños. Esa responsabilidad incluye la prestación de apoyo a todo tipo de familias en todas las circunstancias. La privación de libertad conlleva unas circunstancias muy difíciles para las familias y los niños, y exige medidas gubernamentales específicas para mitigar sus efectos perniciosos.

El Estudio de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hacen mucho hincapié en la necesidad de invertir en los niños, erradicar todas las formas de violencia dirigida contra ellos y construir un mundo inclusivo, tolerante, justo y sostenible. La Agenda 2030 aspira a crear “un mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación”².

Siguiendo la pauta del Estudio de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el presente informe describe los efectos que causa la privación de la libertad en los menores cuando ellos mismos son el objeto de esa privación o cuando se ven afectados por la privación de la libertad de un padre o un cuidador. En el presente informe se señala que la privación de libertad es una causa importante de la violencia contra los niños y se destaca

1 Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (2006). Nueva York: Naciones Unidas.
<http://www.unviolencestudy.org/>

2 Resolución de las Naciones Unidas, A/RES/70/1, párr. 8.

que el derecho de los niños a la protección contra la violencia obliga a los Estados a facilitarles acceso a un sistema de justicia especializado cuando entren en conflicto con la ley y que los niños cuyos padres o cuidadores estén en la cárcel requieren una protección especial. Los propios niños instan enérgicamente a los Estados a velar por que sus derechos y su interés superior sean siempre el criterio que presida el cuidado y tratamiento de los niños que se vean privados de libertad o afectados por el encarcelamiento de sus progenitores.

1.1 Antecedentes y objetivos

Según el informe de la Representante Especial sobre la prevención de la violencia contra los niños en el sistema de justicia de menores y las medidas destinadas a darle respuesta, se observa una tendencia preocupante a internar a los niños en instituciones, en lugar de ejercer una labor eficaz de prevención para reducir al mínimo el riesgo de que sufran violencia. En ese informe también se constató que la violencia en el hogar y en la comunidad, y la pobreza y las actividades de supervivencia arriesgadas son factores que motivan el ingreso de los niños en el sistema de justicia de menores, y que en el sistema de justicia penal suele usarse el encarcelamiento como sustituto de la remisión a instituciones de atención y protección de la infancia. Las conclusiones del presente informe corroboran esas constataciones.

En su resolución de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó al Secretario General a encargar un “estudio mundial a fondo” sobre los niños privados de libertad que incluyese “buenas prácticas y recomendaciones para la adopción de medidas dirigidas a hacer efectivos todos los derechos pertinentes del niño”³, como la de dar apoyo a la aplicación de las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal⁴. Asimismo, en la resolución se recomendaba que el Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre los Niños Privados de Libertad recogiese opiniones y recomendaciones de los propios interesados.

El presente informe persigue los siguientes objetivos:

- a) Documentar las experiencias y opiniones de niños afectados por la privación de libertad; y
- b) Ayudar a fortalecer los sistemas nacionales de protección de la infancia y el sistema de justicia, y los sistemas policiales y penitenciarios, como forma de prevenir y mitigar los efectos de la privación de libertad en los niños y protegerlos contra la violencia.

1.2 Metodología

El presente informe se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños de 2006, las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos y la exhaustiva labor desplegada por la Representante Especial en forma de investigaciones, promoción, consultas, visitas sobre el terreno y los cuatro informes temáticos que se mencionan más arriba⁵.

A los efectos del presente informe se concibió una metodología para las consultas, las entrevistas individuales y los debates de los grupos de discusión basada en la labor sobre participación infantil que la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños había realizado previamente. En todo momento se observaron unos principios éticos rigurosos y las debidas salvaguardias de protección de la infancia, incluida la confidencialidad de las entrevistas.

Parte de la información reunida consiste en datos cualitativos y cuantitativos sobre los efectos de la privación de libertad en los niños afectados. En lo que respecta a los niños privados de libertad se evaluaron específicamente los factores que impulsan

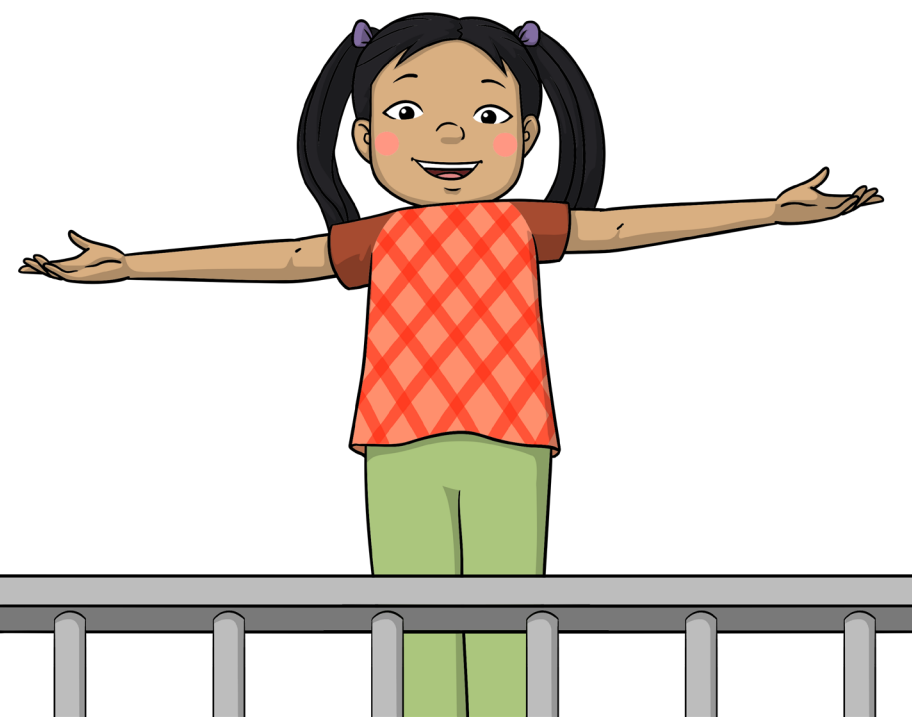
3 Resolución A/69/157, párr. 52 d).

4 UNODC, *Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal* (2015), Naciones Unidas, Nueva York.

5 En la pestaña “Consolidar evidencia” de <https://violenceagainstchildren.un.org/> se enumeran todas las publicaciones.

la privación de libertad, el tipo de delitos, las condiciones de privación de libertad, la exposición a la violencia, la existencia de entornos capaces de brindar protección y apoyo, el acceso a educación, actividades recreativas e instalaciones adaptadas al uso infantil, las actitudes y aptitudes de los funcionarios, el acceso a los servicios de salud y a la defensa jurídica, el conocimiento y la disponibilidad de medidas sustitutivas del encarcelamiento y oportunidades de reinserción.

Se prepararon cuestionarios adaptados a los niños con el apoyo de UNICEF, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República del Uruguay, el Departamento de Participación Infantil de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay y la Plataforma Regional para Niños con Referentes Adultos Privados de Libertad (Plataforma NNAPes).



@Dora Bardales/Jessica Garcia

2. Panorámica de las normas internacionales pertinentes

Existen varias normas internacionales que atañen a los niños que entran en contacto con el sistema de justicia nacional, ya sea como posibles infractores, víctimas o testigos, o como resultado del encarcelamiento de un progenitor o cuidador. Estas normas establecen principios y obligaciones que deben regir la labor estatal de protección de los derechos de los niños afectados por la privación de libertad.

El principal instrumento internacional para la protección de la infancia es la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado establece que los niños tienen derecho a una protección especial dadas sus condiciones especiales en cuanto titulares de derechos por razón de su vulnerabilidad y su dependencia de los adultos para ejercer ciertos derechos, su madurez, su crecimiento y desarrollo progresivos, y, en muchas circunstancias, el desconocimiento de sus derechos humanos y de la forma de protegerlos. Por todos estos motivos, no cabe comparar la situación de los niños con la de los adultos. La Convención afirma que los sistemas de justicia de menores deben tener en cuenta la importancia de promover la reintegración del niño en la sociedad⁶ y afirma explícitamente que el encarcelamiento de los niños se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda⁷. El tratado también confirma que principios generales de justicia, como la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de la acusación y el derecho a recibir asesoramiento jurídico, también rigen en el caso de los niños⁸.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores ("Reglas de Beijing", 1985) incluyen disposiciones relativas a la remisión, es decir, la adopción de medidas para ocuparse de los jóvenes infractores sin someterlos a un juicio oficial. Lo que se pretende al apartar a los jóvenes del sistema de justicia oficial es evitarles los efectos perniciosos que se desencadenan cuando se entablan procesos en el marco de la administración de justicia de menores. La remisión suele consistir en la reorientación a servicios de apoyo comunitarios. Además, se confirma y subraya el principio del encarcelamiento como medida de último recurso en el caso de la prisión provisional, y se enumeran varias alternativas a la privación de libertad, como la supervisión estricta, los cuidados intensivos o la acogida en una familia o en un centro u hogar educativos⁹. En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad ("Reglas de Tokio", 1990) se recogen otras opciones para imponer penas a los infractores jóvenes sin privarlos de la libertad.

6 Artículo 40.1.

7 Artículo 37 b).

8 Artículo 40.

9 Artículo 40.4.

Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (“Reglas de La Habana”, 1990) marcan unas directrices claras sobre la gestión de la privación de libertad, la reintegración y las medidas disciplinarias. Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (“Directrices de Riad”, 1990) establecen orientaciones detalladas sobre la forma en que los Estados deben prevenir el contacto de los niños con el sistema de justicia y apoyar a las familias, ofrecer una educación de calidad y colaborar con la comunidad y los medios de comunicación en el logro de una prevención eficaz.

En las Directrices de las Naciones Unidas de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal (“Directrices de Viena”, 1997) se destaca la urgencia de velar por que los sistemas de justicia de menores se conciban y establezcan como parte del sistema nacional de protección de los niños, y la importancia de establecer mecanismos de vigilancia independientes para supervisar las condiciones de encarcelamiento. Las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal, aprobadas en 2014, se han traducido en la creación de una plataforma de cooperación destinada a reformar los sistemas de justicia penal para salvaguardar los derechos de los niños y atender sus preocupaciones a todos los niveles.

Otros instrumentos de aplicación general que, pese a no referirse específicamente a los niños que entran en contacto con el sistema de justicia de menores, son pertinentes por la protección que brindan a las personas privadas de libertad.

- Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la utilización apropiada y las condiciones del cuidado alternativo de los niños (2009);
- Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Utilización de Programas de Justicia Restitutiva en Materia Penal (2002), que obligan a los Estados a facilitar programas de justicia restaurativa en todas las etapas del proceso penal;
- Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (versión revisada de 2015), que obligan a los Estados a separar a los reclusos jóvenes de los adultos y exigen que los Estados reduzcan al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad;
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (1984);
- El Protocolo Facultativo (2002), que prohíbe la tortura y el trato inhumano y degradante; y
- las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delinquentes (“Reglas de Bangkok”, 2010).

Según la interpretación del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el artículo 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a establecer una edad mínima de responsabilidad penal en su legislación nacional. El Comité ha recomendado que la edad de responsabilidad penal se fije en 14 años como mínimo¹⁰.

Todos los mecanismos estatales que entren en contacto con niños deberían integrar un enfoque de derechos de la infancia en sus sistemas y coordinarse estrechamente con las autoridades que velan por esos derechos, incluidos los establecimientos carcelarios en los que haya padres u otros cuidadores cumpliendo condena. La integración de un enfoque de derechos de la infancia en el sistema judicial, para ser eficaz, debe englobar políticas, reglamentos, asignaciones presupuestarias y sistemas de datos, además del refuerzo de la capacidad institucional y la adopción de procedimientos que tengan en cuenta las necesidades de la infancia¹¹.

¹⁰ <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf>

¹¹ Véase la resolución 2009/26 del Consejo Económico y Social, “Apoyo a las medidas adoptadas en el plano nacional e internacional para reformar la justicia de menores, en particular mediante una mejor coordinación de la asistencia técnica”, aprobada el 30 de julio de 2009.

Con la aplicación de esas medidas los Estados podrán mitigar los efectos perniciosos de la privación de libertad para la infancia, ya sean los propios niños los que están privados de libertad o sus progenitores.

En 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 63/241¹², en la que exhortó a los Estados a dar “consideración prioritaria a las medidas no privativas de libertad al dictar sentencias o decidir medidas previas al juicio respecto de la persona única o principal que cuida al niño, condicionadas a la necesidad de proteger al público y al niño, y habida cuenta de la gravedad del delito”. En la Declaración de Salvador, aprobada en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre el Delito (2010), se resaltó la importancia fundamental de la salvaguardia de los derechos de los hijos de reclusos¹³. En 2011, el Comité de los Derechos del Niño dedicó su Día Anual de Debate a los “hijos de personas encarceladas”¹⁴ y formuló recomendaciones concretas para salvaguardar los derechos de esos niños.

Las Reglas de Bangkok (para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad) también incluyen disposiciones específicas sobre la protección de los hijos de reclusos, como la que establece que en el caso de que la fuente principal o única de cuidados de un niño sea una mujer, se dé preferencia a las medidas no privativas de la libertad.

En el plano regional, el artículo 30 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño hace referencia explícita a la protección de los niños con padres o cuidadores encarcelados:

Los Estados deben dar un trato especial a las mujeres embarazadas y a las madres de lactantes y niños pequeños a las que se haya acusado o declarado culpables de infringir la ley.

El Comité Africano de Expertos en los Derechos y el Bienestar del Niño ha establecido que el artículo 30 también atañe a los niños afectados por la privación de libertad de sus padres y cuidadores principales (incluidos los abuelos y la familia de acogida). El Comité Africano también ha reconocido que el encarcelamiento de los padres tiene una incidencia nociva en la protección de los derechos de los niños y que algunos de sus efectos son comparables a los ocasionados por una muerte o divorcio. El Parlamento Europeo también ha subrayado que la privación de libertad de los padres y cuidadores tiene efectos perniciosos en los niños¹⁵.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas¹⁶ reconocen que los Estados deben tener en cuenta la dimensión familiar de la privación de libertad para proteger los derechos de las personas que padecen esta privación. En concreto, los Principios establecen que las penas privativas de libertad que decidan imponer los Estados “tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados [y] la resocialización y reintegración familiar”. En los juicios debe prestarse una atención especial a la dimensión familiar del encarcelado, ya se trate de un menor que sea padre o madre, o de un adulto responsable de un niño.

El principio IX.2, relativo al registro de las personas privadas de libertad, obliga a los Estados a consignar en un registro, de la forma más exhaustiva posible, los datos personales de las personas privadas de libertad, incluida información sobre sus familiares. Se trata de una medida importante para ayudar a los Estados a reunir datos sobre los niños privados de libertad y los niños con padres o cuidadores encarcelados, de forma que los Estados estén en condiciones de fundamentar con solidez las políticas públicas que adopten específicamente para salvaguardar los derechos de los niños inmersos en esas situaciones.

12 Resolución A/63/241 de la Asamblea General de las Naciones Unidas <https://undocs.org/A/RES/63/241>.

13 Declaración de Salvador sobre Estrategias Amplias ante Problemas Globales: los Sistemas de Prevención del Delito y Justicia Penal y Su Desarrollo en un Mundo en Evolución, párr. 26 https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/Salvador_Declaration/Salvador_Declaration_S.pdf

14 Comité de los Derechos del Niño Informe y recomendaciones del Día de Debate General, Hijos de personas encarceladas (2011) <https://ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2011/DGD2011ReportAndRecommendations.pdf>

15 Resolución del Parlamento Europeo de 27 de noviembre de 2014, 2014/2919(RSP), párr. 13.

16 Principios y Mejores Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008), <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp>

El principio III.4 también establece que la familia es un elemento que debe tenerse en cuenta al optar por medidas alternativas a la privación de libertad o sustitutivas de esta. Al aplicar esas medidas, los Estados “deberán promover la participación de la sociedad y de la familia, a fin de complementar la intervención del Estado”. Se trata de una disposición importante que refuerza el derecho de los niños a ser escuchados en los juicios cuando sus derechos resulten afectados por la privación de libertad.

2.1 Legislación nacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe titulado Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas¹⁷, evaluó el nivel de cumplimiento por los Estados de las normas internacionales de derechos humanos en materia de justicia de menores y reconoció que en América Latina se han aplicado medidas importantes para formular un marco jurídico especial en esa esfera de la justicia y ajustar las prácticas, instituciones y servicios a las normas internacionales. Por ejemplo, en países como el Paraguay y el Uruguay, la edad mínima de responsabilidad penal se ha fijado en 14 años.

No obstante, como señaló la CIDH, se observa una disparidad notable entre el marco jurídico y la realidad de los niños que entran en contacto con el sistema judicial. Esta disparidad, motivo de preocupación constante para la Representante Especial desde hace años, se ha tratado de subsanar mediante visitas sobre el terreno, el compromiso permanente con los Estados Miembros y una cooperación técnica ininterrumpida.

En general, según se indica en el informe de la CIDH, la mayoría de los Estados de la región rara vez hace uso de alternativas a la privación de libertad, el personal del sistema judicial carece de las aptitudes y capacitación adecuadas, y, en su mayoría, los sistemas judiciales americanos recurren a la privación de libertad antes del juicio y después de la condena.

En países como el Uruguay, el marco jurídico faculta a los jueces para interrumpir los procesos judiciales en cualquier momento, sean del tipo que sean. La legislación uruguaya contempla alternativas claras a la privación de libertad; sin embargo, como ha subrayado la CIDH, estas alternativas se utilizan en menos del 1 % de los casos. La legislación uruguaya fija en 12 horas el período máximo de detención de un niño en una instalación policial y exige que la policía informe al tribunal de la detención en un plazo máximo de dos horas.

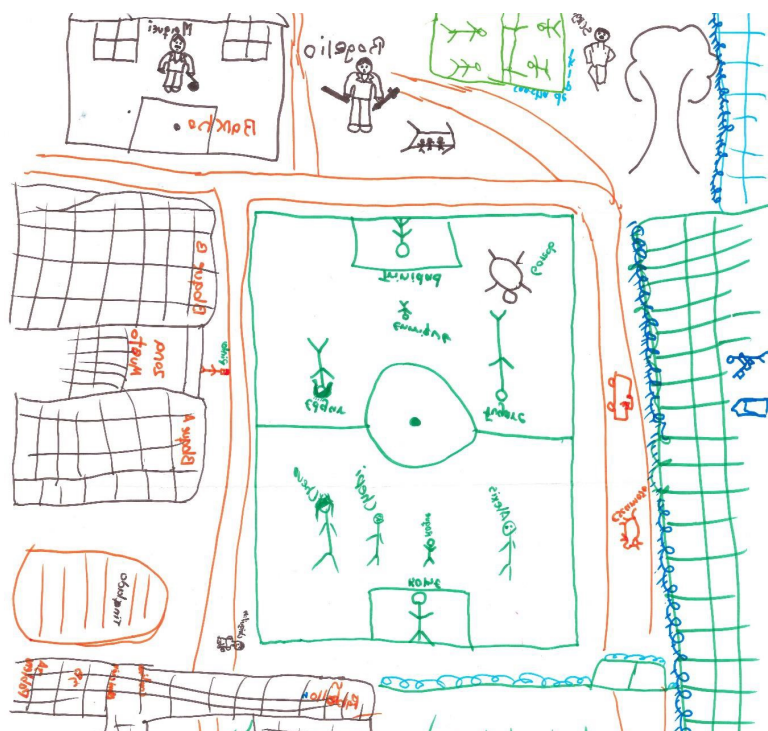
En 2014, el Paraguay puso en marcha un plan nacional para los adolescentes en conflicto con la ley, que incluye la adopción de un enfoque restaurativo en relación con los jóvenes inmersos en esa situación¹⁸. La legislación del país dispone que la privación de libertad sea una medida de último recurso y prevé una serie de alternativas a la reclusión. También establece un período máximo de 8 años para la privación de libertad en los casos de delitos graves¹⁹.

Como bien han destacado los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos, incluido el mandato de la Representante Especial, en la mayoría de los países de la región las obligaciones internacionales contraídas por los Estados siguen sin hacerse realidad en la vida diaria de los niños afectados por la privación de libertad. Las constataciones del presente informe corroboran esa conclusión.

17 CIDH OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78 (2011) <http://www.oas.org/en/iachr/children/docs/pdf/JuvenileJustice.pdf>

18 Ministerio de Justicia del Paraguay, <http://www.ministeriodejusticia.gov.py/areas-tematicas/justicia-juvenil-restaurativa>

19 Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay, artículos 200, 207.



@UNICEF Paraguay

3. Constataciones principales

Los procesos de justicia de menores se rigen por la premisa de que los jóvenes son fundamentalmente diferentes de los adultos en cuanto a nivel de responsabilidad y posibilidades de rehabilitación. Según el artículo 40.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el sistema de justicia de menores debe velar por que “todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes [sea] tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad”. El objetivo principal del sistema de justicia de menores es ayudar al infractor en el desarrollo de sus aptitudes, en la rehabilitación y en el tratamiento para que logre reintegrarse en la comunidad. Lamentablemente, parece que ese ideal aún dista mucho de hacerse realidad para la mayoría de los menores infractores. Hoy por hoy faltan políticas, reglamentos y mecanismos adecuados para mitigar los efectos de la privación de libertad en los niños. Los programas restaurativos y la remisión siguen siendo infrecuentes, y en muchos casos las decisiones judiciales relativas a adultos que son padres no tienen en cuenta los efectos del encarcelamiento en el interés superior de los hijos.

La Representante Especial, en su informe temático *Promover la justicia restaurativa para niñas, niños y adolescentes*²⁰, se muestra partidaria de cambiar la percepción y respuesta de los Gobiernos en relación con los delitos cometidos por menores de modo que el enfoque punitivo se sustituya por otro que tenga en cuenta las causas y las consecuencias. Para ello hace falta un sistema que adopte un enfoque restaurativo de la justicia y haga uso de la remisión para apartar del sistema de justicia penal a los menores infractores. En el informe se demuestra sobradamente que los programas de justicia restaurativa son de gran provecho para los niños en cuestión, las víctimas y la sociedad en general.

La justicia restaurativa ofrece una alternativa a la privación de libertad de los niños y, a su vez, los protege contra la violencia, los abusos y la explotación. Las investigaciones también indican que los padres que han ayudado a sus hijos mediante un proceso de justicia restaurativa se muestran menos proclives a disciplinarlos con violencia. Los niños que participan en programas de justicia restaurativa muestran menos tendencias antisociales en la comunidad y en el hogar. Es más probable que no se integren en pandillas –lo cual, en muchos países, es una cuestión de vida o muerte–, por lo que corren menos riesgo de

20 Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, *Promover la justicia restaurativa para niñas, niños y adolescentes* (2013). https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/restorative_justice_spanish.pdf

convertirse en víctimas de la violencia armada o relacionada con las pandillas. También presentan unas tasas de reincidencia considerablemente más bajas que otros grupos. Cuando las respuestas punitivas no sirven para modificar la actitud de los niños en materia de infracciones, la dimensión participativa de la justicia restaurativa les ofrece la oportunidad de captar plenamente la magnitud del daño que han causado y asumir la responsabilidad de manera constructiva. A pesar de ello, ninguno de los niños consultados en el presente estudio hizo referencia alguna a programas de justicia restaurativa ofrecidos por el sistema.

El presente informe confirma las conclusiones de informes anteriores, según las cuales, los niños afectados por la privación de libertad viven atormentados por la violencia, el miedo y la inseguridad. Los efectos en los niños privados de libertad y los efectos en los hijos de reclusos presentan algunas diferencias de matiz, pero las consecuencias de la privación de libertad son siempre negativas y se dejan sentir durante mucho tiempo en la vida de los niños.

3.1 Factores socioeconómicos

3.1.1 Pobreza y falta de acceso a los servicios sociales

Un rasgo habitual de los niños entrevistados para el presente informe es que tienden a proceder de familias en situación de pobreza y exclusión social, y de entornos en los que viven rodeados de diversas formas de violencia. La situación de estos niños, ya de por sí vulnerables, se agrava cuando se les priva de libertad o cuando tienen a un padre, o a los dos, en la cárcel.

Estos niños suelen vivir en barrios pobres. El siguiente cuadro muestra que la mayoría de los niños privados de libertad en Montevideo procede de los municipios A y D, la zona en que más personas viven por debajo del umbral de pobreza de todo el país.

“ *Las vidas de estos niños están marcadas por la violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Muchos niños refieren haber sido víctimas de violencia o testigos de actos graves de violencia contra otros.* ”

En mi familia, mi padre le gritaba a mi madre, mi madre estaba siempre a punto de llorar y mi familia era un desastre. Por eso mi madre metió a mi padre en la cárcel, para que no volviera a molestarla. ”

¿Y cómo te sientes ahora?

“ *Contenta de estar con mi madre, que también está contenta porque mi padre es lo peor.* ”

Nicaragua, niña de entre 6 y 9 años

¿Y a ti qué te gusta de ella?

“ *Que mi cuñada no me maltrata.* ”

República Dominicana, niña de entre 10 y 13 años

Número de niños privados de libertad en Montevideo, por municipio

Municipio	Niñas	Niños	Total
A	1	48	49
B	0	4	4
C	0	4	4
CH	0	0	0
D	0	35	35
E	1	12	13
F	1	17	18
G	0	16	16
S/D	0	4	4
Total	3	140	143

Fuente: Informe de UNICEF sobre la consulta a adolescentes privados de libertad en Uruguay, junio de 2018

Otro denominador común es la falta de un entorno propicio. Muchos niños crecen en familias que no les proporcionan afecto ni protección y que tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas de la vida. Los padres que viven presionados por la necesidad de conseguir suficiente comida y un hogar adecuado para sus hijos, sin apenas ayuda del Estado, disponen de poco tiempo para mostrarles amor y afecto. En muchos casos, los niños pertenecen a familias en las que un gran número de hermanos convive con otros parientes como abuelos, tíos y primos, y en las que la violencia doméstica está a la orden del día. El castigo corporal también forma parte de sus vidas. Según UNICEF, en América Latina y el Caribe, dos de cada tres niños de entre 2 y 4 años sufren algún tipo de disciplina violenta en su hogar y uno de cada diez adultos está convencido de que los castigos físicos y humillantes son necesarios para educar a un niño.

Algunos niños declararon que vivían sin sus padres, o que vivían o trabajaban en la calle. Muchos hijos de reclusos terminan viviendo en establecimientos de acogida y, si bien no hay datos exactos sobre el número de niños de ese perfil que residen en esas instituciones, los datos de UNICEF indican que 240.000 niños de la región viven en

centros institucionales de acogida, en su mayoría como resultado de la violencia y la pobreza. Algunos niños privados de libertad señalaron lo siguiente:

Hay niños aquí que ya no tienen familia; no tienen a nadie fuera del centro. Si sales del centro, nadie quiere reciberte en su casa porque has pasado por aquí.

Algunos niños hablaron también de la precariedad que experimentaban ellos y sus familias en cuanto al acceso a los servicios sociales, la salud, la educación, la vivienda, el saneamiento y la protección. Una niña de la República Dominicana declaró lo siguiente:

“ Me gusta cambiar de centro porque a veces no son seguros. Algunas personas sintecho son malas. Los centros se inundan. Ahora nos hemos mudado a uno que no se inunda. ”

República Dominicana, niña de entre 6 y 9 años

En algunos casos, el comportamiento delictivo se transmite directamente de los padres a los hijos. Un niño encarcelado explicó lo siguiente:

“ Mi madre estaba en la cárcel. A mi padre lo metieron preso en Chile por asesinato y luego se mudó a Uruguay y lo encarcelaron por estafa. Mi padre me enseñó que no hay que robar a la gente de la calle; hay que atracar tiendas y negocios porque tienen dinero. ”

3.1.2 Drogas y alcohol

Las drogas y el alcohol suelen estar presentes en la vida de estos niños. En muchos casos, los adultos y los niños se ven privados de libertad como resultado de su participación en el tráfico de drogas, casi siempre como traficantes de poca monta; en otros casos, los niños experimentan la violencia como resultado del consumo de drogas y alcohol. Algunos niños crecen viendo que el tráfico de drogas es una forma de obtener ingresos y caen en el consumo nocivo para evadirse de su dura realidad cotidiana. La historia de uno de los niños participantes en las consultas, cuya madre trató de dejar al padre, que era alcohólico, ilustra bien ese fenómeno:

“ *Mi padre gritaba a mi madre, y yo me sentía culpable [...] Mi padre estaba borracho [...] Trató de matar a mi madre [...] Mi padre la amenazaba y le decía que o se encontraba con él en un parquecito o nos mataría. Entonces mi madre siempre volvía a quedar con él.* ”

Uruguay, niña de entre 10 y 12 años

Un estudio realizado en 2015 sobre políticas contra la droga y justicia de menores en América Latina reveló hasta qué punto las drogas son la causa del encarcelamiento de los jóvenes²¹. En el Brasil, donde la mayoría de las causas penales está relacionada con los narcóticos o los delitos contra la propiedad, cerca del 27 % de los adolescentes encarcelados cumplen condena por tráfico de estupefacientes. En Colombia, entre el 25 % y el 30 % de los reclusos adolescentes está en la cárcel por producción, transporte o tráfico de drogas. En el Paraguay, el 85 % de los adolescentes privados de libertad por el sistema de justicia de menores se halla en esa situación por consumir cocaína en forma de crack, pese a que, según la ley, el consumo de drogas (al contrario que la venta) no es delito²².

Algunos países castigan los delitos relacionados con las drogas con penas desproporcionadas, tan elevadas como las penas por homicidio. De hecho, en un estudio sobre las condenas por delitos relacionados con las drogas realizado en 2012 en siete países de América Latina se constató que en tres de ellos –Bolivia, el Ecuador y México– las penas máximas por tráfico de estupefacientes eran más elevadas que la pena mínima por homicidio²³. Desde el punto de vista jurídico, unos pocos gramos pueden ser la diferencia entre el delito de posesión para uso personal y el delito de tráfico.

Según el Informe de la Organización de los Estados Americanos sobre el consumo de drogas en las Américas 2019²⁴, niños de apenas ocho años de edad ya consumen estupefacientes. El Informe también señala que en la mayoría de países que disponen de datos sobre las tendencias, el consumo de tabaco disminuye sistemáticamente mientras aumenta el de cannabis, y en la mitad de los países americanos se observa un incremento en el consumo de cocaína. Asimismo, según el Informe, el nivel de consumo femenino de ciertas drogas en algunos países ya iguala o supera al de los hombres.

A nivel mundial, la proporción de mujeres encarceladas por delitos relacionados con narcóticos también es mayor que la de hombres. Según el Informe de la OEA sobre el problema de las drogas en las Américas, las mujeres encarceladas por microtráfico no violento representaban casi el 70 % de todas las mujeres privadas de libertad en la región. La mayoría de ellas tenía niños a

21 Defensa de Niñas y Niños internacional (DNI) y Red de Coaliciones Sur (2015): “Justicia Penal Juvenil, Políticas de Drogas y Seguridad Ciudadana”, Red de Coaliciones Sur, Defensa de Niñas y Niños Internacional y Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil.

22 *Ibid.* pág. 4.

23 Uprimny Yepes, R, Guzmán, DE & Parra Norato, J (2012). La Adicción Punitiva: La desproporción de leyes de drogas en América Latina, Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

24 Organización de los Estados Americanos Informe sobre el consumo de drogas en las Américas (2019). http://www.cicad.oas.org/Main/ssMain/E-report_ENG_2019/mobile/index.html.

su cuidado cuando cometieron el delito, muchas eran cabezas de familia de hogares monoparentales, y, durante su estancia en prisión, dejaban a sus hijos al cuidado de otro pariente o en centros de acogida²⁵. Se advierte, pues la necesidad de tomar en consideración las repercusiones de la privación de la libertad en la infancia al evaluar los efectos en los niños de la legislación y las políticas sobre drogas. Se ha demostrado que los enfoques punitivos en materia de fiscalización de los estupefacientes tienen consecuencias perniciosas para los niños, en particular la separación de las familias, de ahí que los efectos de la privación de libertad en los niños están vinculados estrechamente con la respuesta de los Estados al tráfico de drogas y alcohol.

En consecuencia, al aplicar leyes y políticas relacionadas con ambos productos, los Estados deberán tomar en cuidadosa consideración su obligación de salvaguardar los derechos de la infancia. Cada vez son más los que promueven la idea de regular las drogas en lugar de prohibirlas, aduciendo que con ello se reducirían las sumas de dinero y, por tanto, los niveles de violencia que conlleva el tráfico ilícito de estupefacientes, ya que esta violencia afecta considerablemente a las mujeres, los niños y los jóvenes²⁶. Por ejemplo, según Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, ha llegado el momento de que la región se plantee seriamente la legalización de las drogas²⁷.

3.1.3 Armas pequeñas y armas ligeras

Hay una relación estrecha entre el acceso a las armas pequeñas y ligeras y la privación de libertad. La disponibilidad de armas de fuego agudiza la violencia y la delincuencia organizada. Se estima que cerca del 75 % de las armas de fuego del mundo está en manos de civiles²⁸. Según la ONG Small Arms Survey, en 2016 murieron asesinadas por arma de fuego unas 210.000 personas, el 38 % de todas las víctimas de violencia letal. Ese año se registraron en América Latina y el Caribe unas proporciones muy elevadas de muertes por arma de fuego; en algunos países, hasta un 50 % de la violencia letal se cometió con un arma de fuego, frente al 12 % registrado en los países con las tasas más bajas²⁹.

En algunos países, la falta de seguridad y la violencia generalizadas han motivado que muchos niños hayan perdido a uno de sus padres y que muchos tengan a uno de sus padres en prisión. La participación de la familia, o de uno o más de sus miembros, en actividades ilícitas también constituye un factor de riesgo para el niño, ya que este termina por considerar natural y rutinaria esa situación³⁰.

Este hecho ilustra claramente la conexión entre la accesibilidad de las armas, la violencia y el número de niños que se quedan sin cuidado parental como resultado de la privación de libertad.

3.2 Niños privados de libertad

3.2.1 El encarcelamiento como medida de último recurso

Las normas internacionales dejan claro que solo debe encarcelarse a los menores infractores como medida de último recurso y que, en la medida de lo posible, sus casos deben tratarse por medios que no sean los procedimientos judiciales; sin embargo, en muchos sistemas de justicia de menores, la principal medida de respuesta a los infractores sigue siendo la privación de libertad. Es más, a muchos de los niños encarcelados se los detiene por delitos leves sin que tengan antecedentes, por lo que, según las normas internacionales, no deberían ser internados en establecimientos penales bajo ningún concepto. Un ejemplo

25 Organización de los Estados Americanos (OEA), El problema de las drogas en las Américas.

26 Werb, D, Rowell, G, Kerr, T, Guyatt, G, Montaner, J & Wood, E (2010). Effect of Drug Law Enforcement on Drug-Related Violence: Evidence from a Scientific Review. Vancouver: International Centre for Science in Drug Policy

27 Ver <http://cronica.com.gt/cepal-a-latinoamerica-le-convendria-legalizar-las-drogas/>

28 Small Arms Survey, <http://www.smallarmssurvey.org/nc/salw/about/background/pointer/3.html>

29 Small Arms Survey, Muertes violentas en el mundo (2017), Resumen Ejecutivo, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/M-files/Armed_violence/Global-Violent-Deaths-2017-ExSum.pdf

30 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Violencia, niñez y crimen organizado* (2015), párr. 209 <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf>.

particularmente descarnado es el caso de un adolescente del Paraguay que se pronunció sobre los problemas que se vivían en su familia y fue encarcelado como consecuencia de la denuncia que le interpusieron sus familiares:

“ *Mi padre me llevó a la comisaría y de allí vine a parar aquí [a la institución penal].* ”

La prisión preventiva, en particular, debería limitarse a circunstancias excepcionales³¹; sin embargo, en muchos países sigue siendo la primera medida de respuesta a las infracciones cometidas por los jóvenes. En el Paraguay, el 83 % de los niños encarcelados se encuentra en prisión preventiva. En el Uruguay, dos de cada diez adolescentes privados de libertad sufren prisión preventiva durante un período máximo de 150 días. Además, las detenciones suelen practicarse con violencia, y en las dependencias policiales no se separa a los niños de los adultos ni se los informa de los motivos de su arresto.

3.2.2 Condiciones de encarcelamiento

En general, las celdas están abarrotadas y apenas tienen luz o ventilación, los reclusos no disponen de acceso a agua caliente, y las camas y colchones se caen a pedazos. En muchos casos, los niños se ven obligados a defecar dentro de las propias celdas y no tienen agua. Algunos niños comen en las celdas, con lo cual se aíslan más de sus compañeros. Es frecuente que los niños duerman en colchones tirados en el suelo y que las familias tengan que lavarles la ropa fuera del centro. Algunos niños señalaron que el centro de detención no reunía las condiciones necesarias para salvaguardar su derecho a la intimidad.

Algunos niños estaban obligados a pasar 22 y 23 horas al día dentro de las celdas. En algunos casos, las condiciones son tan deplorables que puede hablarse de que los niños viven un proceso de deshumanización.

Es tal la preponderancia de las agresiones físicas, mentales y sexuales en las instituciones donde hay niños reclusos que la violencia se ha normalizado como forma de supervivencia. La violencia entre semejantes y entre adultos y niños se acepta y tolera como forma de disciplina, como forma de autodefensa y como forma de supervivencia. Los niños viven con la sensación de estar indefensos y se vuelven indiferentes a la violencia. La confianza no existe:

“ *Aquí no tengo amigos, sólo compañeros.* ”

¿Tu celda tiene...?

	No	Sí
Ducha	192	73
Lavabo	106	159
Retrete	95	170

Fuente: Informe de UNICEF sobre la consulta a adolescentes privados de libertad en el Uruguay, junio de 2018.

Adolescente del Uruguay

Interrogados acerca del trato que reciben de los funcionarios públicos encargados de su protección y cuidado, la respuesta general fue que los funcionarios y el personal de las instituciones carecen de las aptitudes adecuadas para establecer una mínima relación con los niños y jóvenes. Los funcionarios suelen usar la violencia como forma de disciplina o de comunicación. Los adolescentes privados de libertad insistieron en la necesidad de que el personal tenga las aptitudes adecuadas para propiciar el diálogo con los niños y tratarlos como es debido.

31 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 b); Comité sobre los Derechos del Niño, Observación general núm. 10 sobre los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párrs. 78 a 81.

3.2.3 Falta de acceso a una educación y formación profesional de calidad

El acceso a la educación, el esparcimiento y la atención sanitaria son componentes fundamentales para la reintegración satisfactoria de los jóvenes infractores; sin embargo, en muchos centros de reclusión, ese acceso es precario. Muchos de los adolescentes privados de libertad arrastran un historial de dificultades de aprendizaje y de absentismo y abandono escolar, por lo que adolecen de un retraso educativo respecto de los jóvenes de su edad. En consecuencia, necesitan un apoyo complementario para enjugar ese retraso; pero en muchos casos solo reciben tres horas de clases cuatro días a la semana. Los adolescentes entrevistados manifestaron un interés inequívoco en ir a la escuela. Un adolescente que se declaró analfabeto mencionó haber tenido una profesora que lo ayudó durante 15 días, pero que después desapareció y ya no volvió más:

“ *No paro de preguntar al director del centro cuándo va a volver la maestra. Él dice que volverá, pero nunca viene.* ”

La lengua materna de muchos de los entrevistados que se vieron privados de libertad en el Paraguay es el guaraní o jopara. Un adolescente de la comunidad indígena Toba Qom no pudo recibir educación mientras estuvo preso porque no hablaba castellano. Estos ejemplos revelan la necesidad de coordinar plenamente los servicios dentro del sistema de justicia de menores y ponerlos a disposición de todos los niños, teniendo en cuenta su origen étnico y su idioma.

Varios adolescentes señalaron también que casi todos los programas de formación profesional que ofrecían las instituciones juveniles eran insuficientes porque se limitaban a actividades de cocina, jardinería y carpintería. En lugar de ello, los jóvenes deseaban tener acceso a una gama más amplia de actividades, como deportes, mecánica, lengua, enfermería, formación en cuestiones jurídicas y otros programas similares que pudieran ayudarlos a adquirir aptitudes para labrarse un futuro.

3.2.4 Falta de acceso a los servicios sanitarios, en especial a los servicios de salud mental

Los problemas de salud mental son frecuentes entre los jóvenes privados de libertad y faltan medidas exhaustivas y adecuadas para darles respuesta. El tratamiento suele limitarse a la administración de psicofármacos y a terapias elegidas al azar³². Al señalar los efectos negativos que les ocasionaba el encarcelamiento, los adolescentes mencionaron la depresión, los trastornos del sueño y otros problemas emocionales y de salud mental. También hablaron de lesiones autoinfligidas e incluso de intentos de suicidio.

“ *Tenía muchas cicatrices y rasguños en el brazo. Dijo que se sentía muy mal en el centro. No dormía por las noches.* ”

“ *Intentó suicidarse ahorcándose y perdió el conocimiento. Estaba deprimido.* ”

“ *Tenía cicatrices y rasguños por todo el cuerpo. Dijo que cuando estaba deprimido se hacía cortes con trozos de vidrio.* ”

32 Para más información sobre el uso de psicofármacos, véase: Comité contra la Tortura (CAT/C/URY/CO/3), Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (véase A/HRC/13/39/Add.2) y Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales, CRC/C/URY/CO/3-5.

Un estudio efectuado por UNICEF en 2008 reveló que el 63,9 % de los adolescentes privados de libertad en el Uruguay tomaba somníferos³³. El porcentaje obtenido en el presente estudio apenas se ha reducido: del total de adolescentes entrevistados, un 56,3 % declaró que consumía psicofármacos, y dos de cada tres dijeron que los tomaban para dormir.

La mayoría de los niños tenía acceso a servicios de enfermería, pero a veces faltaban medicamentos. En algunos centros de menores no había medicamentos y en otros se denegaba la atención sanitaria como forma de castigo. He aquí el testimonio de un adolescente paraguayo:

“ *A veces, si te portas mal, te castigan sin poder ir a la enfermería, aunque te duela algo.* ”

También se constató que muchos adolescentes carecen de acceso a información y servicios relativos a los derechos sexuales y reproductivos. Cuando se le preguntó sobre los derechos sexuales y reproductivos, la respuesta habitual fue “¿qué es eso?” o “aquí nunca vino nadie a hablarnos de eso” (dos adolescentes paraguayos). En el Uruguay, tan solo el 10 % de los adolescentes recibió información sobre los derechos sexuales y reproductivos, aunque todas las jóvenes declararon haber acudido al ginecólogo al menos una vez durante su encarcelamiento.

3.2.5 Acceso precario a la asesoría jurídica

En muchos casos, los niños no mantienen un contacto regular con sus defensores jurídicos ni con representantes de mecanismos independientes de derechos humanos. En el Uruguay, la mitad de los adolescentes entrevistados no había sido informada de los cargos que se le imputaban. En el Paraguay, solo los condenados mantenían un contacto regular con jueces, defensores del pueblo o representantes de otras organizaciones nacionales, como el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Del total de adolescentes uruguayos entrevistados, solo el 27 % conocía a su abogado de oficio. Entre los que estaban en contacto con su abogado de oficio, siete de cada diez opinaban que no pasaban suficiente tiempo con él.

¿Estás en contacto con tu abogado?

“ *Nunca. La última vez que lo vi fue en el Palacio de Justicia. No, no conozco a mi abogado. No lo he visto nunca. No, no sé nada, no sé cuánto tiempo estaré aquí [...] Quiero saber cuándo tendré una audiencia para poder mantener la esperanza.* ”

Cuando se preguntó a los adolescentes sobre el contacto con los mecanismos nacionales independientes de derechos humanos, uno de ellos contestó lo siguiente:

“ *No quiero hablar con ellos [...] porque solo vienen a escucharte si te han pegado, y no quiero contárselo.* ”

3.2.6 Grupos especialmente vulnerables

En general, los efectos de la privación de libertad se agravan en función del género, la orientación sexual, el origen étnico o la discapacidad del joven infractor.

33 UNICEF y Movimiento Nacional Gustavo Volpe, *Privados de libertad. La Voz de los Adolescentes* (2008), pág. 60.

Dado el número relativamente bajo de niñas privadas de libertad, muchos países no prevén procedimientos específicos para ellas ni cuentan con instalaciones separadas por sexos³⁴. Por ejemplo, en el Uruguay, de 265 niños privados de libertad en doce centros de menores, 257 (97 %) eran niños y ocho (3 %) niñas. Las normas internacionales prescriben la separación entre adultos y niños, y entre niños y niñas. Es evidente que la privación de libertad no afecta de igual manera a los niños que a las niñas, de ahí la necesidad de adoptar enfoques que tengan en cuenta las cuestiones de género y las necesidades infantiles al abordar los efectos de la privación de libertad en todos los niños. Esta necesidad también se advirtió en los países estudiados en el presente informe.

En las instituciones de reclusión, los niños LGTBI (lesbianas, homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales) corren un riesgo especialmente elevado de sufrir graves formas de discriminación y violencia sexual a manos de sus compañeros y de adultos. Uno de los entrevistados contó que a un niño de ese colectivo tuvieron que aislarlo por su propia seguridad porque “todos lo agarraban y lo violaban”. A veces, los niños LGTBI, cuando se les da la oportunidad de participar en actividades educativas en el centro, sufren malos tratos. En uno de los centros, una adolescente transgénero colaboraba en la coordinación de las clases de cuarto curso, pero dejó de hacerlo porque sus compañeros le faltaban al respeto:

“ ... no lo soporto. Quiero dejar la coordinación de cuarto [...] Me gustaría ayudar a la maestra a organizar las clases [...] pero ya no aguanto más, porque mis compañeros no me respetan y este año hay un grupo muy difícil. ”

3.3 Niños que tienen a un padre o cuidador en la cárcel

El encarcelamiento de un miembro de la familia tiene efectos negativos en el entorno familiar, ya de por sí vulnerable, en la economía familiar y en el cuidado de los niños.

“ Mi familia cambió mucho cuando metieron a mi padrastro en la cárcel. Mi madre ya no comía, dejó de hacer cosas [...] salía a vender y no volvía hasta la una o las dos de la mañana [...] Nadie cuidaba de mi hermano más pequeño; se quedó solo. ”

México, niña de entre 12 y 16 años

Los niños se sienten abandonados por sus padres e invisibles para el Estado.

“ Cuando tus padres están en la cárcel, ¿quién te va a ayudar? ”

Chile, niño de entre 13 y 17 años

34 Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, *Safeguarding the rights of girls in the criminal justice system* (2015) https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/document_files/safeguarding_the_rights_of_girls_in_the_criminal_justice_system_1.pdf.

“ *Somos personas, pero para la sociedad es como si no existiésemos.* ”

Uruguay, niño de entre 13 y 17 años

La privación de libertad de un padre o cuidador también expone a los niños a los riesgos del trabajo infantil, el internamiento en instituciones y la vida en la calle y a situaciones de violencia, abuso y explotación.

“ *Mi abuela no tenía dinero para comprarme el uniforme ni una mochila, y yo siempre tenía que ir al mercado a vender con ella.* ”

Nicaragua, niña de entre 6 y 9 años

“ *Me iba a cortar leña para ayudar a mi madre y luego la vendía con un socio.* ”

Uruguay, niño de entre 13 y 17 años

Como es lógico, la situación resulta aún más difícil para los niños de familias monoparentales, que suelen sufrir desarraigo y abandono físico y emocional, y corren más riesgo de terminar internados, sobre todo cuando el progenitor encarcelado es la madre.

“ *Mi madre está presa desde que yo tenía ocho años. Cometió un robo, lleva seis años en la cárcel, y la situación me ha afectado en todo porque me metieron en un centro que da mucho miedo.* ”

Uruguay, niña de entre 13 y 17 años

Además, cuando las madres están en la cárcel, toda la responsabilidad de cuidar a los hermanos suele recaer en las hijas mayores.

“ *Cuido de mi hermano pequeño, vengo al centro de menores y luego me pongo a limpiar.* ”

Uruguay, niña de entre 13 y 17 años

La necesidad de trabajar y obtener ingresos, la desorganización y la falta de autoridad en el hogar, y la incapacidad del sistema educativo para acoger a estos niños contribuyen a agudizar las dificultades de aprendizaje, el ausentismo y las tasas de abandono escolar.

“ *No fui a la escuela hasta que mi padre y mi madre salieron de la cárcel.* ”

Nicaragua, niña de entre 6 y 8 años

El encarcelamiento de un progenitor también limita las oportunidades de recreación de los niños y su participación en el juego y en actividades educativas y sociales.

“ *No salgo a la calle porque tengo que ayudar a mi madre en su puesto de comida de lunes a domingo, o sea, todos los días.* ”

Nicaragua, niña de entre 13 y 16 años

También sufre menoscabo el derecho infantil a la salud. Los niños describen sentimientos de tristeza, soledad, dolor, miedo, vergüenza, odio y rabia que pueden causar situaciones de estrés grave, lo que a su vez afecta al desarrollo del cerebro.

“ *Todos en la familia están tristes y deprimidos porque se sienten solos.* ”

Argentina, niño entre 6 y 9 años

En general, los niños de 6 a 12 años expresan sentimientos de tristeza por la ausencia de un miembro de la familia, mientras que los adolescentes manifiestan sobre todo sentimientos de ira, en algunos casos como consecuencia de la violencia que practicaba el pariente que está en la cárcel.

No obstante, cuando el agente de la violencia doméstica era el progenitor encarcelado, los niños también pueden sentirse liberados.

“ *En mi familia mi padre le gritaba a mi madre, mi madre siempre estaba a punto de llorar y mi familia era un desastre. Por eso mi madre metió a mi padre en la cárcel, para que no volviera a molestarla.* ”

¿Y cómo te sientes ahora?

“ *Contenta de estar con mi madre, que también está contenta porque mi padre es lo peor.* ”

Nicaragua, niña de entre 6 y 9 años

También corre peligro el derecho a la educación:

“ No fui a la escuela hasta que mi papá y mi mamá salieron de la cárcel. ”

Nicaragua, niña de entre 6 y 8 años

En la escuela donde estudias, ¿saben que tienes un familiar en la cárcel?

“No, porque no se lo digo a nadie; solo lo sabe un profesor.”

¿Y por qué no lo dices?

“ *Porque me da vergüenza.* ”

¿De qué tienes miedo?

“De que se burlen de mí.”

¿Y tú?

“ De que me peguen. ”

República Dominicana, niños de entre 10 y 13 años

“ En la escuela paso vergüenza porque mis compañeros dicen que somos unos ladrones. ”

Uruguay, niño de entre 13 y 17 años

“En la escuela, los niños a los que caes mal te dicen: “Eh, tu pariente está en la cárcel”. Te sueltan cosas así, como si el delincuente fueses tú.”

México, niño de entre 12 y 16 años

La incapacidad del sistema educativo para acoger a los niños cuyo tutor adulto está en la cárcel contribuye a un mayor índice de ausentismo y abandono escolar.

Los niños que tienen un padre o un cuidador privado de libertad suelen ser objeto de estigmatización, discriminación y condena social, y corren más riesgo de sufrir violencia en la escuela y la comunidad³⁵. Con frecuencia se los rechaza, evita o teme, con los consiguientes sentimientos de aislamiento, vergüenza, rabia y desesperanza.

“ *En el barrio la gente me dice que mi padre debería quedarse en la cárcel para siempre y no salir jamás. Una niña me dice que mi padre debería morir en la cárcel.* ”

República Dominicana, niña de entre 6 y 9 años

“ *Esto es como llevar siempre algo dentro, sin contárselo a nadie. Solo tu familia sabe lo que sientes. No lo cuentas por miedo a que te discriminen.* ”

Argentina, niño de entre 13 y 17 años

Los niños también experimentan la violencia como testigos o como víctimas directas en el momento de la detención de su familiar.

“ *Estaba durmiendo sin camiseta y me sacaron a la calle a patadas y me pegaron.* ”

Uruguay, niño de entre 13 y 17 años

“ *Tenía 7 años y me registraron todo el cuerpo. Éramos tres, mis dos hermanos y yo, nos registraron a todos, tiraron todo fuera de la casa, pero no encontraron nada. No está bien que la policía haga eso. Estábamos durmiendo.* ”

Uruguay, niña de entre 10 y 12 años

35 Véase también el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la protección de los niños contra el acoso A/73/265, párrafo 63.

“ *Cuando arrestaron a mi padre, yo estaba en casa, mi madre estaba en el trabajo. Entraron en la casa y empezaron a gritar, agarraron a mi hermano [...] Yo lloraba sin parar, después agarraron a mi hermano y se lo llevaron.* ”

Panamá, niño de entre 6 y 9 años

“ *No siento ningún resentimiento contra las personas que arrestaron a mi tío, pero no se identificaron, no respetaron ninguna orden de arresto.* ”

México, niño de entre 14 y 17 años

“ *Cuando arresten a alguien, no deberían apuntar a los niños con un arma. Como mínimo deberían pedirles que se vuelvan contra la pared.* ”

Uruguay, niño de entre 13 y 17 años

Los niños con padres o cuidadores encarcelados también experimentan violencia cuando acuden a visitarlos. En la mayoría de los casos, el contacto con los funcionarios de prisiones es una experiencia negativa y caracterizada por la violencia y las faltas de respeto. Las visitas a los padres o cuidadores en la cárcel, tal como la describen algunos niños, es una experiencia traumática.

“ *Son todos unos arrogantes, nos tratan como si fuésemos basura. Por eso no voy, me trataron como si fuese basura, no tienen principios ni educación, son ladrones con una chapa de identificación en el pecho. Nos tratan como si nosotros también fuésemos presos.* ”

Nicaragua, niña de entre 13 y 17 años

Según la descripción de algunos niños, la forma en que se practican los registros corporales en las prisiones constituye una violación de sus derechos. En concreto, cuando visitan a sus parientes presos, los niños sienten peligrar sus derechos a la integridad personal, a la intimidad y al contacto con sus familias.

“ Te registran entero. Cuando no hay escáner te obligan a desnudarte del todo [...] tienes que agacharte, y con las mujeres es peor porque les meten los dedos para ver qué llevan. ”

Uruguay, niño de entre 13 y 17 años

“ Están presos en un lugar horrible. Nos registran la comida que llevamos, nuestras partes íntimas. ”

Nicaragua, niña de entre 6 y 9 años

“ Horrible, insoportable [...] tienes que desnudarte, inclinarte hacia adelante, enseñar el pelo, los pies. Horrible, humillante. ”

Brasil, niño de entre 10 y 12 años

“ Te tocan por todo el cuerpo... ”

República Dominicana, niña de entre 10 y 13 años

“ No deberían cachearnos así [...] No deberían mirarnos las partes íntimas [...] Eso habría que prohibirlo. ”

Chile, niño de entre 13 y 17 años

Otra forma de tratos inhumanos o degradantes que suelen sufrir los niños en las cárceles es la que tiene lugar cuando los agentes del orden y los funcionarios de prisiones dañan los objetos y alimentos que los niños llevan a sus familiares. Los niños, rabiosos y frustrados ante unos actos que juzgan gratuitos, consideran que se les debería compensar por los desperfectos.

“ *Y registran toda la comida que llevamos y nos la devuelven hecha un asco [...] A veces nos la llevamos de vuelta a casa o a veces los funcionarios se quedan con nuestra comida o nuestra ropa.* ”

Panamá, niño de entre 13 y 17 años

“ *Recuerdo que una vez, en su cumpleaños, le llevamos dos tartas muy ricas [...] pero los policías las hurgaron con los dedos y las destrozaron. Se nos quitaron las ganas de comérmolas.* ”

Nicaragua, niña de entre 13 y 17 años

A menudo los niños tienen que recorrer largas distancias para visitar a sus familiares y guardar horas de cola desde muy temprano.

“ *Llegamos a la cárcel a las 5 de la mañana, tenemos que salir a medianoche para viajar toda la noche. Al llegar tenemos que hacer mucha cola, esperar hasta las 8, que es cuando abren, y soportar unos registros humillantes. Es horrible.* ”

Argentina, niño de entre 13 y 18 años

Por lo general, la infraestructura de las prisiones es inadecuada y en modo alguno acogedora para los niños. Los lugares destinados a las visitas están llenos de basura y ratas, algo que los niños consideran una forma de maltrato a sus familiares y a ellos.

“ *Es un lugar horrible porque hace mucho calor y hay basura por todas partes.* ”

Nicaragua, niño de entre 6 y 9 años

“ *Todo está sucio, todo huele mal, hay cables estropeados colgando [...] basura por todas partes y eso atrae a los virus. Es una sala con celdas a un lado y otro.* ”

República Dominicana, niño de entre 10 y 13 años

“ *No es como estar en casa [...] hay ratones. Es incómodo, mugriento.* ”

Chile, niño de entre 13 y 17 años

En general, los niños hacen hincapié en que, por culpable que sea su familiar, ellos deben ser tratados con respeto. Los niños expresan ira y frustración contra el sistema que no protege sus derechos ni los de sus familiares y sienten que las prisiones son lugares donde los sentimientos de violencia y rabia de esos familiares no hacen sino acrecentarse. Algunos niños señalaron que sus parientes salieron de la cárcel con una conducta más violenta y que, para remediarlo, los presos deberían recibir terapia durante su reclusión.

“ *Vas allí como si fueras a ver a un animal, no a una persona. Vas a cuidar a un amigo, a un pariente, a alguien que merece una segunda oportunidad o que cometió un error [...] Pero no te dan esa segunda oportunidad.* ”

Argentina, niño de entre 13 y 18 años

La opinión generalizada es que en todo el sistema penitenciario impera la corrupción. Los funcionarios suelen pedir dinero a los niños y a sus familiares a cambio de permitirles introducir objetos en la cárcel o de ciertos beneficios para los encarcelados.

¿Tuviste que ofrecer un soborno para llevar comida a la prisión?

“ *Sí...* ”

México, niño de entre 14 y 17 años

“ *Tengo que pagar 5.000 pesos para que me dejen llevarle algo a mi tío [...] Hay muchos policías corruptos.* ”

Uruguay, niño de entre 13 y 17 años

A pesar de las dificultades persistentes con que tropiezan al acudir a la cárcel, los niños aprecian las visitas a sus progenitores y consideran que son una oportunidad ineludible de mantenerse en contacto con ellos. He ahí la razón por la que muchos niños, pese a los malos tratos que reciben, siguen yendo a visitar a sus padres.

Y cuando vas a visitarlo, ¿te sientes triste o contento?

“ Me siento contento. ”

¿Contento?

“ Sí, porque puedo verlo. ”

Argentina, niño de entre 6 y 9 años

“ Un abrazo... Cuando llevas mucho tiempo sin ver a alguien y entras en la cárcel, un abrazo es extraordinario. Una alegría, una emoción. ”

Argentina, niño de entre 13 y 18 años

Muchos niños mencionaron que el tiempo asignado para las visitas es muy corto y realmente desproporcionado en comparación con el tiempo que pasan haciendo cola y sometiéndose a los registros.

¿Qué hiciste en media hora?

“ Comer, reír, hablar [...] Hablamos de lo que cada uno vive por separado. ”

Y cuando estuviste allí, ¿querías quedarte mucho tiempo o enseguida querías irte?

“ Quería pasar mucho tiempo con ellos. ”

¿Qué pasa cuando termina la visita? ¿Cómo te sientes de camino a casa?

“ Me echo a llorar. ”

Panamá, niño de entre 13 y 17 años

¿Cómo es la experiencia de visitar una cárcel?

“ *Es incómoda, te obligan a desvestirte, pero si vas a ver a tu madre... ahhh...* ”

Entonces, ¿vale la pena ir?

“ *¡Ya lo creo!* ”

Chile, niño de entre 13 y 17 años



@UNICEF/UN0217746/Bindra

4. Conclusiones

La privación de libertad siempre tiene un efecto negativo y duradero en la vida de los niños. Como se deduce de las descripciones de los niños consultados para el presente informe, su encarcelamiento o el encarcelamiento de uno de sus padres o cuidadores puede afectar gravemente a su desarrollo y bienestar, y está relacionado con sentimientos de abandono, estrés, miedo, soledad, aislamiento y ansiedad y con la falta de protección y acceso a las necesidades básicas. Los niños afectados por la privación de libertad corren más riesgo de sufrir violencia y se sienten invisibles en las políticas estatales y condenados por la sociedad.

Familiares de niños encarcelados que también están privados de libertad en el Uruguay

Padre o madre	46
Pareja de la madre	3
Pareja del padre	1
Hermanos	48
Pareja	0
Niños	0
Otros parientes (abuelos, tíos, tías, primos, etc.)	103

Fuente: Informe de UNICEF sobre la consulta a adolescentes privados de libertad en el Uruguay, junio de 2018

Muchos niños privados de libertad tienen también un padre o pariente en prisión, y, en algunos casos, los propios niños encarcelados son ya padres. En el Uruguay, el 67 % de los niños privados de libertad dijo haber tenido un familiar en la cárcel en el pasado y el 42 % dijo tenerlo en el momento de la entrevista. Estos porcentajes son una prueba del ciclo pernicioso que puede desencadenar el ingreso en el sistema de justicia en la niñez y una de las razones poderosas por las que urge adoptar medidas de prevención y aplicar el principio de remisión para los menores infractores.

Algunos de los jóvenes encarcelados a los que se entrevistó para el presente estudio ya eran padres. Tenían poco o ningún contacto con sus hijos y no recibían ninguna ayuda del Gobierno para potenciar sus habilidades parentales.

En el Uruguay, 28 reclusos adolescentes (un 11 %) tenían hijos. Todos ellos tenían solo un hijo, menos uno que tenía dos. De esos 29 hijos de reclusos adolescentes, 11 habían nacido mientras sus padres cumplían condena. Los adolescentes que mantenían contacto con sus hijos los veían en visitas periódicas en espacios no aptos para niños.

Ninguno de los establecimientos penitenciarios incluidos en la presente investigación tenía parques infantiles u otros espacios adaptados a las necesidades de los niños. Los hijos de reclusos adolescentes suelen vivir con la madre, o con sus abuelos, o en una institución residencial. Los Estados deberían adoptar medidas para garantizar que los menores que son padres puedan

estar presentes durante el parto, reciban ayuda para registrar el nacimiento y puedan visitar a sus hijos, sobre todo cuando los niños vivan con sus madres encarceladas.

Los niños privados de libertad tienden a ver el futuro con pesimismo. Están convencidos de que la sociedad los mira con muchos prejuicios y no está preparada, ni dispuesta, a reintegrarlos e incluirlos. En palabras de un adolescente encarcelado:

La sociedad... Lo único que opina la sociedad de los que estamos metidos aquí, en el Centro Educativo de Itagua, es que no vamos a cambiar, somos unos drogadictos, siempre seremos los mismos.

Paraguay, adolescente de 17 años

En muchos casos, los adolescentes apenas vislumbran oportunidades de empleo. La mayoría de ellos desean vivir con sus familias y amigos, encontrar trabajo y seguir estudiando.

Los niños con padres encarcelados suelen tener una visión más esperanzada del futuro. En concreto, los niños más pequeños, de 6 a 12 años de edad, se muestran optimistas acerca de su futuro y subrayan especialmente que no quieren repetir los errores de sus padres. Los adolescentes tienden a contemplar el futuro con más pesimismo y ven posible llegar a infringir la ley en algún momento de su vida.

Urge adoptar medidas para poner fin a los efectos nocivos de la privación de libertad en los niños y su relación con el ciclo de la violencia. El encarcelamiento de niños debe ser siempre el último recurso. Las medidas alternativas a la privación de libertad deben ser la regla, no la excepción, y la violencia y el confinamiento deben prevenirse de manera integral y coordinada. Al mismo tiempo, dados los graves efectos que ocasiona la reclusión en los niños, y en aras de su interés superior, el encarcelamiento de padres y cuidadores siempre debe sopesarse con cautela para garantizar que también sea una medida de último recurso. Estas medidas deben ir acompañadas del fortalecimiento de la protección jurídica de los niños contra los efectos negativos de la privación de libertad y contra toda forma de violencia.



@UNICEF/UN0217821/Bindra

5. Recomendaciones

- **Impedir que los niños tengan que lidiar con el sistema de justicia penal**

Urge reforzar los sistemas nacionales de protección de la infancia para salvaguardar con eficacia los derechos de la infancia, en lugar de perpetuar la criminalización y estigmatización de los niños afectados por la privación de libertad. Para ello habría que crear entornos seguros y propicios para los niños, ayudar a las familias y a los cuidadores en su labor de crianza y reforzar la vida mental y emocional del niño. La ayuda también debería adaptarse a la situación específica de las familias afectadas por la privación de libertad, en particular aquellas en las que los encarcelados sean los progenitores. De conformidad con las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, los Estados deberían ofrecer una buena modalidad alternativa de cuidado a los niños separados de sus padres y cuidadores.

- **Proteger a los niños contra todas las formas de violencia que se dan en el sistema de justicia de menores y en el sistema de justicia penal mediante la integración de esta dimensión en el programa de política nacional**

Se deberían examinar y revisar las leyes, las políticas y los procedimientos para ajustarlas a las normas internacionales de protección de los niños en el sistema de justicia de menores y en el sistema de justicia penal y el sistema penitenciario. El proceso de reforma de la justicia de menores debería enmarcarse en un enfoque que tenga en cuenta las necesidades de la infancia y las diferencias de género, a fin de promover un sistema justo, eficaz y eficiente que se convierta en un elemento nuclear del sistema nacional de protección de la infancia.

Las detenciones en las que esté presente un niño deberían contar con la participación de personal especializado en derechos del niño y practicarse en coordinación con el sistema nacional de protección de la infancia. Deberían formularse protocolos para regular el comportamiento de las fuerzas del orden y los funcionarios de prisiones cuando detengan a infractores en presencia de sus hijos, para informar de la detención a los niños que no estén presentes y para organizar las visitas familiares de un modo acorde a las necesidades de los niños. Nunca debería recurrirse a la prohibición del contacto con la familia como medida disciplinaria contra ninguna persona privada de libertad.

- **Priorizar la remisión y otras medidas no privativas de la libertad dentro del sistema de justicia de menores**

Es imprescindible promover un cambio de paradigma para sustituir los métodos punitivos por un enfoque de justicia restaurativa que respete y proteja los derechos de la infancia. Se insta a los Estados a idear y aplicar mecanismos eficaces que sustituyan a las actuaciones penales convencionales y tengan en cuenta las necesidades de los niños y las diferencias de género, como la justicia restaurativa, la mediación y los programas orientados a la comunidad, incluidos programas de tratamiento de niños con problemas de abuso de sustancias. La promoción de programas de justicia restaurativa para niños y para padres y cuidadores acusados de delitos debería estar disponible y ser accesible en todos los entornos en que haya niños de por medio. Los Estados deberían velar por que todos los funcionarios del sistema de justicia de menores, incluidos los agentes de la autoridad, los fiscales y los jueces, y todos los encargados de impartir justicia de base comunitaria, como los líderes religiosos y tradicionales, reciban formación en materia de observancia de los derechos de la infancia que guarden relación con la justicia de menores y la justicia restaurativa para niños.

- **Establecer mecanismos de asesoramiento y presentación de quejas que sean seguros, eficaces y acordes las necesidades de los niños**

Se insta a los Estados a examinar la legislación y las políticas pertinentes para establecer mecanismos de asesoramiento, notificación y presentación de quejas que sean seguros, eficaces y acordes a las necesidades de los niños para dar respuesta a los casos de violencia. Debería informarse a los niños privados de libertad y a los hijos de reclusos sobre sus derechos y sobre los mecanismos que existen para proteger esos derechos y para que los niños puedan hacerse oír. Estos mecanismos deberían tener en cuenta las diferencias de género, culturales y de discapacidad, y manejar un lenguaje adaptado a los niños. Convendría establecer mecanismos de asesoramiento, incluido el tratamiento psicológico y el apoyo social, para los niños privados de libertad y los hijos de reclusos. Los defensores del pueblo, las instituciones nacionales independientes de derechos humanos o las comisiones de derechos de la infancia desempeñan un papel fundamental en el examen de las denuncias por violencia.

- **Establecer mecanismos autónomos e independientes de supervisión, inspección y vigilancia**

Los Estados deberían examinar sus leyes, políticas y procedimientos para obligar a las instituciones de reclusión de menores a someterse a la inspección periódica de mecanismos de vigilancia autónomos e independientes, como instituciones nacionales de derechos humanos, defensores del pueblo o jueces inspectores, a fin de prevenir los casos de violencia y darles respuesta. Las visitas deberían organizarse observando el principio de confidencialidad para proteger a los niños del acoso o las represalias, y también debería incluirse la posibilidad de realizar visitas sin previo aviso.

- **Establecer mecanismos de responsabilidad y fortalecerlos**

Se insta a los Estados a modificar sus leyes, políticas y procedimientos para garantizar la asunción de responsabilidad en los casos de violencia contra niños que se produzcan en el sistema de justicia de menores y en el sistema penitenciario de adultos. Ante toda denuncia fundada de un acto de violencia contra niños que se haya cometido en cualquier fase del sistema de justicia de menores, los Estados deberían emprender investigaciones públicas, y estas a su vez deberían encomendarse a personas íntegras, recibir financiación suficiente y llevarse a término en el debido plazo. Los Estados deben asegurar también la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos de los niños relacionadas con las visitas a sus padres y cuidadores encarcelados.

- **Dotar a los centros de personal cualificado y capacitado**

Con objeto de establecer sistemas eficaces de justicia de menores y penitenciarios, los Estados deberían concebir un sistema sólido de selección, contratación y perfeccionamiento del personal, nombrar a profesionales competentes y bien capacitados y conservarlos, y ofrecer una remuneración adecuada. También es fundamental verificar los antecedentes de todo el personal del sistema de justicia de menores que trabaje en contacto directo con niños y también de los que entren en contacto con ellos durante las visitas carcelarias a padres y cuidadores. Los Estados deberían alentar a las asociaciones profesionales a formular

normas coercitivas de conducta que promuevan la justicia e impidan la comisión de actos de violencia contra los niños en el sistema de justicia de menores.

- **Fomentar la reunión, el análisis y la difusión de datos y formular planes de investigación y presentación de informes para evaluar y prevenir los actos de violencia contra los niños inmersos en el sistema de justicia de menores y los que mantienen contacto con sus padres y cuidadores encarcelados, y para darles respuesta**

Los Estados deberían formular planes de reunión, análisis y presentación de datos para vigilar la prevención de la delincuencia juvenil y valorar los resultados del sistema de justicia de menores. Asimismo, convendría que los Estados recopilasen datos fiables sobre los hijos de padres encarcelados. Deberían idearse indicadores específicos y aplicarse periódicamente para valorar los resultados del sistema de justicia de menores. Debería implantarse un sistema de seguimiento estadístico que manejase datos desglosados sobre niños y menores con padres y cuidadores reclusos para evaluar y prevenir las violaciones de sus derechos humanos y darles respuesta, prestando una atención especial a los actos de violencia. Los datos recopilados deberían incluir las opiniones y experiencias de los niños, e información sobre los actos de violencia cometidos contra los niños que estén reclusos en establecimientos penales o que entren en contacto con el sistema penitenciario por tener un progenitor en la cárcel.

- **Concebir mecanismos eficaces de coordinación y cooperación entre los servicios encargados de la aplicación de la ley, la justicia, el sistema penitenciario, la educación, la salud y el bienestar social**

Se insta a los Estados a que examinen las leyes, las políticas y las medidas prácticas para establecer una coordinación y cooperación eficaces entre el sistema nacional de protección de la infancia, los sistemas de justicia, los sistemas penitenciario y policial y las esferas del bienestar social y la educación. Es importante delimitar claramente las responsabilidades de los distintos agentes e instituciones, idear mecanismos de cooperación oficial entre los interesados y asignar con tino los recursos.

- **Colaborar con los actores locales y la sociedad civil**

Algunos agentes locales, como los alcaldes, los líderes religiosos y comunitarios, y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la construcción de comunidades y vecindarios tolerantes, pacíficos, seguros e inclusivos para los niños. Los alcaldes tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que el desarrollo urbano se adapte a las necesidades de los niños y les ofrezca instalaciones y actividades recreativas adecuadas y seguras para la práctica de deportes, el cultivo de las artes y otros programas recreativos. La sociedad civil debería apoyar la sensibilización pública y la movilización social para cambiar los estereotipos y poner fin a la estigmatización, protegiendo así a los niños afectados por la privación de libertad.

- **Colaborar con el sector empresarial**

El sector empresarial desempeña un papel fundamental en la creación de sociedades pacíficas, tolerantes, seguras y sostenibles. Como se afirma en el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, la protección de los niños contra este fenómeno es responsabilidad de todos. La labor del sector empresarial puede ser decisiva para prevenir la privación de libertad de los niños y erradicar la violencia contra ellos. En el marco de los derechos de la infancia y los principios empresariales, el sector empresarial puede adoptar un enfoque integral basado en esos derechos y crear entornos propicios y favorables para las familias y los niños. Además, puede apoyar la paternidad positiva, aplicar políticas de tolerancia cero hacia la violencia en la familia y en la cadena de producción, influir en la reforma de políticas y leyes y fomentar la transformación cultural de las actitudes que toleran y aprueban la violencia.

El papel de los medios de comunicación y las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones puede ser fundamental para sensibilizar al público, transformar las actitudes que estigmatizan y condenan a los niños afectados por la privación de libertad y evitar que sufran daños. Las empresas de todos los sectores también pueden dar empleo a jóvenes

de comunidades desfavorecidas que de no ser por esa oportunidad podrían terminar incurriendo en actividades delictivas, o colaborar en la ejecución de programas restaurativos y de reinserción para adolescentes y para sus padres y cuidadores encarcelados. De manera complementaria, en consonancia con el Marco de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Empresas, los Estados deberían velar por que las empresas cumplan con sus responsabilidades en relación con los derechos de la infancia.

- **Invertir en los niños y adolescentes**

Como se destaca en la Agenda 2030, la inversión en los niños es una piedra angular del desarrollo sostenible. Esa inversión debería conceder una atención prioritaria a la primera infancia y a la adolescencia, y lograr que las familias adquieran las aptitudes y herramientas necesarias para construir un entorno que ofrezca amor, seguridad y protección a todos los niños. Los niños afectados por la privación de libertad deberían ser considerados miembros valiosos de la sociedad, no una fuente de problemas, y se les debería conceder las mismas oportunidades de disfrutar de una vida digna que a cualquiera. Para ello habría que darles acceso a una educación, recreación y capacitación profesional de calidad y brindarles cuantas oportunidades sean necesarias para reintegrarse plenamente en la sociedad y convertirse en agentes de cambio de sus comunidades y países.



@Dora Bardales/Jessica Garcia

Anexos

Anexo I: Orientación para los grupos de discusión con niños privados de libertad

Los grupos de discusión procuraron crear un espacio en el que los adolescentes se sintiesen cómodos hablando sobre diversos aspectos de la justicia y la reclusión. Una parte de las sesiones se destinó a la expresión de opiniones personales y a la reflexión en grupo. Los grupos de discusión también sirvieron para seleccionar adolescentes que se prestasen a entrevistas individuales. Se usaron fotografías para ilustrar los distintos temas tratados en la pregunta 2 y se formularon las siguientes preguntas para orientar las conversaciones:

- 1) **¿Quién va a la cárcel en tu país?**
 - a) ¿La justicia es igual para todos?

- 2) **¿Crees que el centro educativo es útil?**
 - a) ¿Qué opinas de los servicios que ofrece el centro educativo?
 - i) Trabajadores
 - ii) Alojamiento
 - iii) Comidas
 - iv) Educación
 - v) Recreación
 - b) ¿Cuáles son los principales problemas del centro?

- 3) **¿Cómo sería para ti el centro de reclusión ideal?**

Anexo 2: Testimonios de hijos de reclusos

Testimonio de niños y adolescentes que tienen una madre, un padre o un cuidador en la cárcel

República Dominicana, 8 de agosto de 2017

Proponemos las siguientes ideas para mejorar la situación de los niños y adolescentes que tienen un padre o cuidador en la cárcel:

- 1) Todas las organizaciones nacionales e internacionales deberían crear o integrar organizaciones para prestar apoyo a los niños con padres o cuidadores encarcelados que no tienen acceso a ninguna ONG.
- 2) Deberían celebrarse encuentros nacionales y regionales para que las personas tengan un espacio en el que relatar sus experiencias y de ese modo se conozca mejor la situación de los hijos de reclusos.
- 3) Los jueces y fiscales deberían investigar la situación de la familia del acusado antes de decidir privarlo de libertad.
- 4) Es necesario trabajar con los hijos de reclusos que residen en barrios pobres, prestando especial atención a la educación y la sensibilización. Se debería dialogar con los adultos y establecer contacto con los agentes de la comunidad para enseñarles que no deben estigmatizar a los niños que tengan un padre en la cárcel, sino contribuir a su bienestar.
- 5) El Ministerio de Educación debería emprender actividades de creación de capacidad para dotar a los maestros de las aptitudes necesarias para ayudar a los hijos de reclusos en lugar de subestimarlos; los formularios de matriculación escolar deberían incluir una casilla para consignar si el alumno tiene algún familiar privado de libertad.
- 6) Si un padre recluso ha mostrado un buen comportamiento en la cárcel, el sistema de justicia debería quitarle los antecedentes penales.
- 7) Al practicar una detención, los agentes de la autoridad deberían ir acompañados por un equipo de trabajadores sociales.
- 8) El personal penitenciario debería velar por que las visitas familiares se realicen de manera ordenada, lo que incluye regular el orden de las filas de entrada a la cárcel e impedir las visitas conyugales cuando haya niños presentes o hacer que se programen en días distintos a los de las visitas familiares. En lugar de cachear a los visitantes, sería mejor registrar al prisionero al final de la visita. Podrían usarse detectores de metales y máquinas de rayos X para no someter a los visitantes a registros corporales, salvo que se detecte algo anómalo.
- 9) Las autoridades nacionales competentes en derechos de la infancia y los ministerios de desarrollo social deberían establecer programas de apoyo a los detenidos y a sus familias, y los niños deberían recibir un apoyo fisiológico y financiero específico.
- 10) Los ministerios de trabajo deberían crear programas de apoyo al empleo de las personas privadas de libertad.

Anexo 3: Lista de organizaciones participantes que prestaron apoyo a las consultas con hijos de reclusos

País	Organización	Personal
Argentina	Asociación de Familiares de Detenidos (ACI-FAD) Church World Service (CWS - Oficina Regional para América Latina y el Caribe). Cooperativa Esperanza Aula Vereda	Coordinadores: Andrea Casamento Luciano Cadoni Martín Coria Asistentes: Agostina Suraniti Gonzalo Jatar Belén García Rapisarda Marisa Montes Mauro Vivas Belén Gutiérrez Walter Tavarovsky Jimena Garri Julio Colantoni Vanessa Duarte
Brasil	MENINOS E MENINAS DA RUA	Sidneia Bueno Juliana Fagundes Elis Regina do Carmo
Chile	ONG EN MARCHA	Víctor Gallardo Joan Navarro Javiera Roa Francisca Hidalgo
México	Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social I.A.P. (CIDES IAP) REDIM EDNICA REINTEGRA	Coordinadores: Alicia Vargas Ayala. Guadalupe Anayeli Barrón Becerril. Asistentes: Érica López Lara Karen Concepción Barrón Becerril Nisaly Brito Ramírez Juan Martín Pérez Gabriel Rojas Arenaza Mtra. Jimena Candado
Nicaragua	INPRHU	Psicóloga Celina Obando Laguna Trabajadora social Martha Cecilia Prieto Trabajadora social Heydi Carolina Montiel Echaverry Prof. Sandra Rivero González

País	Organización	Personal
Panamá	REDNANIAP MORADA DE RESTAURACION COORDINA- DORA DE MUJERES INDIGENAS DE PANAMA (CONAMUIP)	José M. Ovalle Colona Heidi J. Guevara de López Melvis Gernado Henríquez Alina Torrero
República Dominicana	CAMINANTE PROYECTO EDUCATIVO	Yocasta Veras González Olga Yan Pardo Javiela Brito
Uruguay	ONG GURISES UNIDOS ONG RESCATANDO SONRISAS	Gonzalo Salles Lía Fernández Verónica Rey Zelmar Lucas



OFICINA DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE
LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS

La Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños es una defensora independiente que trabaja a nivel mundial en favor de la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños y cataliza la acción y el apoyo político para lograr progresos en todo el mundo. Su mandato se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y se enmarca en el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.

@srsgvac

www.violenceagainstchildren.un.org